

Informe de Monitoreo

CONTEXTO ELECTORAL



La violencia amenaza el proceso electoral

Septiembre, 2021

3

Cómo citar este documento:

Tercer informe de Monitoreo sobre el Contexto Electoral en Honduras.
La violencia amenaza el proceso electoral.
Septiembre, 2021

Foto de portada: <https://blogs.iadb.org>

Esta es una publicación que forma parte del proyecto: “**Monitoreo ciudadano de elecciones generales del 2021 en Honduras**”, apoyado por Seattle International Foundation. Sin embargo, las ideas aquí expresadas no representan a estas organizaciones ni a los donantes que las apoyan, y son responsabilidad exclusiva del CESPAD.

Tabla de Contenido

1) Introducción	4
2) Los hechos relevantes	5
2.1 Violencia política	5
2.2 Violencia y protesta social	7
2.3 La pandemia COVID19 y otros factores	9
3) Principales hallazgos	10
4) Recomendaciones	14

1) Introducción

Este informe hace énfasis y coloca especial atención en la violencia política y la violencia social que acontece en el país, protagonizada por diversos actores y en distintas regiones, y que comienza a acrecentarse a medida que se acerca el día de las elecciones generales del 28 de noviembre.

Aunque en el contexto se suscitaron otras temáticas, que destacamos más adelante, en los hechos registrados del 1 al 30 de septiembre, en el marco del Proyecto Monitoreo Ciudadano de Elecciones Generales del 2021 en Honduras, que realiza el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), resultan relevantes y preocupantes los hechos de violencia registrados en este período.

La conflictividad social (ataques físicos y verbales) impregna el entorno del país, en medio de una polarización que amenaza el año electoral. De hecho, las víctimas de las diversas manifestaciones de violencia política, de acuerdo a datos del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), de noviembre del 2020 a mayo del 2021 se distribuyen de la siguiente manera: 21 en el Partido Nacional de Honduras (PNH), 8 en el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), 5 del Partido Liberal (PL), y 1 del Partido Anticorrupción (PAC). De este total de actos de violencia, 12 han sido homicidios¹. Siempre teniendo como fuente al IUDPAS, de estos 35 actos de violencia, el más afectado, hasta el momento, ha sido el Partido Nacional.

También el IUDPAS ha advertido que en el marco de las elecciones generales 2021, “hay altas probabilidades de que se reediten las características del proceso electoral de 2017, cuando la debilidad de las instituciones electorales quedó en evidencia, y la falta de confianza y credibilidad”.

No obstante los datos del IUDPAS, en los meses de agosto y septiembre los eventos de violencia se han ido concentrando en el partido LIBRE y el Partido Liberal, a partir de los lamentables enfrentamientos del día del sorteo de la papeleta electoral, el pasado 30 de agosto.

1 <https://presencia.unah.edu.hn/noticias/14-aspirantes-de-diversos-partidos-politicos-han-fallecido-en-honduras-durante-el-proceso-electoralvo-articulo/>

Los datos que destacamos en este informe, acontecen en el marco de una justa electoral de la cual es imposible soslayar las múltiples crisis que se vive por la pandemia del COVID-19 y sus secuelas económicas y sociales, las violencias contra las mujeres y defensores y defensoras, la crisis humanitaria y ambiental, los escándalos de corrupción, la conflictividad social y las históricas fracturas de desigualdad social, genérica, generacional, racial y territorial, entre otras.

De allí la urgente necesidad de colocar en la mesa de discusión el tema de la violencia política, al igual que los otros tipos de violencia social, con el propósito de identificar alternativas y posicionarlas ante la institucionalidad pública a fin de contribuir a evitar la agudización esta violencia, la cual podría alcanzar niveles similares a la del 2017, a escasos días para que se desarrollen los comicios del 28 de noviembre.

2) Los hechos relevantes

2.1 Violencia política

En este apartado incluimos hechos de violencia que han sido dirigidos de manera directa contra el liderazgo político, candidatos o no candidatos a puestos de elección popular, y sus familiares. También se debe considerar las manifestaciones de violencia verbal.

a) Asesinatos en Ilima, Santa Bárbara

El asesinato de dos hermanos de una regidora de la municipalidad de La Unión, en el departamento de Santa Bárbara, marcó el inicio de la violencia política del mes de septiembre de 2021². Los hombres fueron interceptados a inmediaciones de “El Pozo”, la cárcel de máxima seguridad en Ilima, Santa Bárbara, donde fueron atacados a disparos.

b) Hermano de diputado suplente asesinado

El crimen de Wilkin Montalván³, quien era hermano del diputado suplente, Milton Mateo Montalván, del partido Libertad y Refundación (LIBRE), levantó las alertas

2 <https://www.latribuna.hn/2021/09/01/dos-hermanos-de-regidora-mueren-en-ataque/>

3 <https://www.latribuna.hn/2021/09/02/falsos-medicos-ultiman-a-hermano-de-diputado-en-hospital-de-la-capital/>

en este contexto, ya que se trató de un asesinato propiciado por varias personas que ingresaron a un hospital privado de Tegucigalpa y asesinaron a la víctima, vestidos de médicos.

c) Candidato a alcaldía de San Luis, Santa Bárbara, agredido con arma de fuego

La agresión, con arma de fuego, que sufrió el candidato del Partido LIBRE a la alcaldía por el municipio de San Luis, Santa Bárbara, Rommel Rivera, quien también es Comisionado en condición de retiro, marcó también la tendencia del mes en violencia política. Para completar el caso, la información pública indica que un individuo, a bordo de una motocicleta, le disparó cuando estaba en la zona en la que radica.

d) Atacado candidato a la alcaldía en El Paraíso

Un grupo de activistas del Partido Nacional atacaron al aspirante a la alcaldía de San Antonio de Flores, al sur de El Paraíso, por el Partido Liberal, Pedro Cáceres, quien denunciaba traslados ilegales para los comicios de noviembre próximo⁴.

e) Agredida candidata a diputada en Cortés

Los medios de comunicación, informan sobre la agresión física sufrida por Lesbia Betina Cruz Martínez, candidata a diputada en el departamento de Cortés por el partido LIBRE. Una turba identificada con el Partido Nacional “se avalanchó contra Cruz Martínez a la 1:00 p.m. de este domingo 5 de septiembre cuando ella realizaba un video denunciando irregularidades en una jornada de cambio de domicilio para ejercer el sufragio, donde además se estaba dando dinero a quienes llegaban de otras localidades”⁵.

f) Alcaldes amenazados por la gobernación política

La denuncia fue interpuesta de manera oficial por los alcaldes David Castro, Amable de Jesús Hernández, José Avelar, Carlos Galeano y José Chirinos, los alcaldes que recibieron la donación de vacunas contra el COVID19 por parte Nayib

4 <https://www.defensoresenlinea.com/turba-ataca-a-candidato-liberal-en-san-antonio-de-flores-el-paraiso/>

5 <https://www.defensoresenlinea.com/mp-revictimiza-a-candidata-a-diputada-en-sps/>

Bukele, presidente de El Salvador. “Dicen que nos van a hacer desaparecer y que inclusive van a utilizar a los militares”, denunciaron ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH)⁶.

g) Discurso de violencia se va posicionando en la campaña electoral

En la medida que avanza la campaña, el tono de los discursos se ha vuelto más violento a través de los medios convencionales, pero sobre todo en las redes sociales. Los ánimos se encendieron desde el enfrentamiento en el INFOP el pasado 30 de agosto, en el acto de sorteo de la papeleta electoral. En este marco, el actual presidente del Partido Nacional y candidato a alcalde de Tegucigalpa ha ofrecido “puño” a sus contendores. Chávez y su equipo se han justificado afirmando que son víctimas de provocaciones constantes, especialmente, de simpatizantes de Libre, Liberales y el partido Salvador de Honduras (PSH), todos de la oposición⁷.

h) Absuelven a policía acusado de muerte en la crisis pos electoral del 2017

El policía militar hondureño Denis Cáceres fue declarado este 30 de septiembre «no culpable» y fue absuelto de la muerte David Octavio Quiroz, hecho ocurrido durante las protestas surgidas del contexto del fraude en las elecciones generales de 2017. Esta decisión fue anunciada por un comunicado del poder judicial⁸.

2.2 Violencia y protesta social

La violencia social se expresa en la infracción de las diversas generaciones de derechos humanos. En septiembre los más destacados fueron los siguientes:

a) Uso desproporcionado de la fuerza pública y el asesinato de misquitos

Las noticias reportan un enfrentamiento entre elementos de las Fuerzas Armadas y pobladores de la zona de La Mosquitia, que dejó como saldo dos personas

6 <https://www.pressreader.com/honduras/diario-el-heraldo/20210917/281668258109381>

7 <https://www.latribuna.hn/2021/09/09/insultos-discursos-violentos-y-misoginia-relegan-propuestas-en-10-dias-de-campana/>

8 <http://www.radioamerica.hn/absuelven-policia-militar-acusado-de-una-muerte-en-tesis-postelectoral-de-2017/>

muertas y más de siete heridos⁹. El confuso hecho abrió de nuevo el debate del uso desproporcionado de fuerza y las supuestas actividades del narcotráfico en este sector, que por años ha sido increpado de vivir de actividades ilícitas.

b) A defensor ambiental de Gaupinol se le niega atención médica

En el contexto de violación de derechos humanos de líderes y defensores, destaca la denuncia que realizaron los familiares de Jeremías Martínez¹⁰, uno de los ocho defensores de los ríos Guapinol y San Pedro, del municipio de Tocoa, en el departamento de Colón, que están en prisión. Martínez, a través de sus familiares, alertó al Comité de Familiares Detenidos-Desaparecidos de Honduras (COFADEH), que se encuentra en “estado de salud grave, y que no ha recibido la atención médica debida”. COFADEH, como entidad representante del caso, ha informado que, pese a intentos de comunicarse con las autoridades penitenciarias, aún se desconocen detalles concretos relacionados al estado de salud de Martínez.

c) Defensor indígena denuncia persecución y amenazas

Hermín López Martínez, un reconocido defensor de Derechos Humanos del departamento de La Paz, denunció que es víctima de persecución, vigilancia y amenazas, por lo que su vida corre peligro¹¹. López, quien integra la red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos Indígenas Lencas de La Paz (Redil-paz), y actualmente es coordinador Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz, Honduras (MILPAH), acudió al Comité de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), para denunciar los hechos.

d) Amenazas de despojo de tierras en comunidad indígena

Unas 120 familias que residen desde 1739, en la comunidad de Tierras del Padre¹², a 13 kilómetros de Tegucigalpa, están bajo amenaza de ser despojados

9 <https://www.latribuna.hn/2021/09/19/fiscalia-sigue-investigacion-por-incidente-que-dejo-varias-personas-heridas-en-la-mosquitia/>

10 <https://criterio.hn/defensor-de-gaupinol-bajo-prision-arbitraria-urge-de-atencion-medica/>

11 <https://www.defensoresenlinea.com/defensor-de-derechos-humanos-de-la-paz-denuncia-persecucion-y-amenazas-por-su-labor/>

12 <https://criterio.hn/habitantes-de-tierras-del-padre-a-punto-de-ser-desalojados-de-sus-tierras-ancestrales/>

de sus tierras luego que la jueza nueve del Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa ordenó, para el 14 de octubre próximo, su desalojo. Estas familias cohabitan en unas 322 manzanas de tierra.

e) Honduras entre los 5 países del mundo donde se registran más crímenes contra ambientalistas

Según el último informe publicado por Global Witness, el 2020 ha sido el año más mortífero desde que lleva el recuento, con 227 asesinatos de líderes ambientales en todo el planeta, lo que significa, en promedio, cuatro líderes muertos por semana, superando el récord de 212 muertes violentas del 2019. Después de Colombia y México, el tercer puesto mundial lo ocupa Filipinas (29), seguido en su mayoría por países latinoamericanos: Brasil con 20 asesinatos, Honduras (17), República Democrática del Congo (15), Guatemala (13), Nicaragua (12), Perú (6), India (4), Indonesia (3), Suráfrica (2) y Tailandia (2)¹³.

f) En manifestación pacífica se dijo “no” a las ZEDE

Simpatizantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) y Sociedad Civil, realizaron una protesta el 15 de septiembre en el bulevar Morazán en Tegucigalpa, paralelo al desfile militar que se realizó a inmediaciones del estadio Nacional por el Bicentenario de Independencia. Entre sus consignas destacaron su rechazo a la instalación de la Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), esgrimiendo que violan la soberanía del territorio hondureño¹⁴.

2.3 La pandemia COVID19 y otros factores

a) Estado actual de la pandemia

Pese a las advertencias de la expansión del Covid-19, los casos de contagios y muertes en el país van en aumento, especialmente entre la población joven. La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), indicó que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), ha detectado 31,349 infecciones por covid-19 en niños y adolescentes. La Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Sa-

13 <https://www.latribuna.hn/2021/09/13/honduras-entre-los-paises-del-mundo-donde-se-registran-mas-crimenes-contra-ambientalistas/>

14 <https://hondudiario.com/nacionales/simpatizantes-de-libre-y-sociedad-civil-marchan-contra-las-zedes-en-la-capital/>

lud (SESAL), también registra 91 muertes de mujeres embarazadas y puérperas fallecidas por COVID-19 en Honduras, y SINAGER registra, para todo el período de la pandemia, 363 mil casos hasta el 25 de septiembre, con un promedio de 17 muertes diarias (con un total de 9,177 personas).

b) La tragedia de la migración haitiana

En Honduras se está produciendo un aumento migratorio de ciudadanos haitianos que buscan escapar de la crisis política y económica existente en su país. Un promedio diario de 350 personas ingresan Honduras con destino a EE.UU.¹⁵. Desgraciadamente, el racismo que cruza a sectores de la sociedad hondureña ha determinado acciones de violencia en contra de la migración caribeña (agresión a las mujeres, asaltos, negación a la atención de salud, entre otros).

c) Aumentan las solicitudes de refugio y deportaciones de hondureños

Según el titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Andrés Ramírez, al final de septiembre 31,884 habían solicitado refugio, superando su marca anual del 2020¹⁶. Pero igualmente, Honduras experimentó un aumento del 33,2% en las deportaciones de sus migrantes desde México, Estados Unidos y otros países de Centroamérica, según su Observatorio Consular y Migratorio (CONMIGHO). De acuerdo con esta institución, entre enero y el 5 de septiembre de 2021, el país recibió a 37.531 retornados, frente a los 28.182 reportados en 2020 en el mismo periodo¹⁷.

3) Principales hallazgos:

En relación con la violencia política

- a) La violencia política y la violencia social es la característica principal del contexto en el cual están insertas las elecciones generales de Honduras. En relación con la violencia política, a la fecha se registran aproximadamente

15 https://www.youtube.com/watch?v=2iaS_Vf7ygE

16 https://twitter.com/AndresRSilva_/status/1443934515546759171

17 <https://www.vozdeamerica.com/a/honduras-deportaciones-desde-eeuu-mexico/6216990.html>

17¹⁸ muertes violentas que atañen no solo a los actores políticos, ya que la escalada de violencia alcanza a los familiares de quienes buscan cargos de elección popular en el país. En un contexto de violencia estructural y de amplio predominio del narcotráfico, en momentos electorales es de esperar un incremento del crimen, pues no podemos desconocer que “los barones de la droga” son un actor relevante en el financiamiento de las campañas electorales, buscando negociar cuotas de poder en el futuro gobierno. Además, tampoco es posible desconocer que los homicidios por causas indeterminadas es un denominador común en el país.

Sin embargo, lo más preocupante es que la mayoría de los hechos de violencia están relacionados directamente con la polarización de la campaña política, lo cual ha quedado en evidencia en algunos eventos del cronograma electoral. Para el caso, el sorteo de las posiciones en la boleta electoral y el proceso de traslados domiciliarios en las oficinas del registro civil. A propósito, uno de los estándares claves de elecciones libres y auténticas es la de disponer de una atmósfera pacífica, libre de violencia, intimidación o amenazas, para que partidos y candidatos puedan desarrollar la campaña electoral, promover sus programas y convencer a los electores para ejercer el sufragio. Debe constituir un punto de alarma este clima de polarización y violencia al cual asistimos en plena campaña electoral.

- b) Más allá de la violencia física, las agresiones verbales contenidas en los discursos de algunos aspirantes también alimentan este ambiente de violencia.

Hasta ahora, para controlar esta situación ha estado ausente la institucionalidad electoral, a la cual la Ley Electoral de Honduras (LEH), en el artículo 115, le otorga facultades para intervenir en actos de violencia física y verbal con sanciones administrativas (en el caso del CNE). Sin embargo, es mucho más grave que el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), aún no cuente con una Ley aprobada por el Congreso Nacional para proceder penalmente contra los perpetradores de las violencias y otros delitos penales relacionados con el

18 Al reporte del IUDPAS hay que agregar el asesinato de: José Lorenzo Bejarano (ex alcalde de Yamaranguila), Carolina Echeverría Haylock (candidata a diputada), los dos (2) hermanos de la regidora de la municipalidad de la Unión (Santa Bárbara) y de Wilkin Montalvan (hermano de un diputado suplente).

ejercicio electoral. Pero no solo esto ocurre, la indiferencia de un Ministerio Público para actuar de oficio y contener la ola de violencia electoral que está tomando fuerza y se proyecta como una fuerte amenaza, con vistas al 28 de noviembre, es alarmante.

- c) Las amenazas y agresiones trascendieron de los actores políticos que buscan un cargo de elección popular, a los funcionarios públicos que ya lo ostentan. Diversos alcaldes, dentro del grupo que pidieron apoyo meses atrás, al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para que se les donara vacunas contra el Covid19 para sus comunidades, denunciaron que el gobernador de Francisco Morazán los amenazó con “desaparecerlos” y que, incluso, fueron intimidados con militares, debido a la petición. Este hecho retrata la violencia estructural y la intolerancia que caracteriza al actual régimen político, estas actuaciones siembran miedo e impiden el libre ejercicio de los derechos ciudadanos.
- d) La absolución del policía militar Denis Cáceres, acusado del asesinato de David Octavio Quiroz en el contexto de la protesta social por el fraude de las elecciones de noviembre del 2017, es un lamentable mensaje del sistema de justicia a los responsables de la seguridad pública. Hasta la fecha no se ha registrado ninguna condena de funcionarios policiales y del ejército por los asesinatos y violaciones a los derechos humanos ocurridos en la coyuntura ya indicada. Según informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH), en ese contexto se produjo el asesinato de por lo menos 28 personas “alrededor de 60 personas resultaron heridas, la mitad de ellas con munición letal. Entre el 1 y el 5 de diciembre de 2017, al menos 1,351 personas fueron detenidas por violar el toque de queda”¹⁹. La absolución del policía militar Cáceres, registrada este 30 de septiembre, es una confirmación de la impunidad estructural que prevalece en el país y luz verde para que en este noviembre pudieran repetirse los hechos de noviembre del 2017.

19 OACNUDH. Responsabilidad por la violación a los derechos humanos cometidas en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras: avances y desafíos. Pág. 4. <http://oacnudh.hn/wp-content/uploads/2020/01/INFORME-TEM%C3%81TICO-2017-Enero-2020.pdf>

En relación con la violencia y protesta social

- a) El contexto se caracterizó, además, por las violaciones constantes a los derechos humanos a indígenas, líderes y defensores ambientalistas que han sido criminalizados, en medio de la que parece la “táctica” del Estado, para frenar las acciones de oposición o protesta a la imposición de proyectos extractivos. Esta situación ha llamado la atención de la comunidad internacional que, en comunicados, ha exigido el respeto al debido proceso, así como a la libre determinación de los pueblos. Pero la persecución persiste por parte de las fuerzas del orden público, y defensores y defensoras temen que esa represión se acentúe con más fuerza en los próximos meses.
- b) El incidente registrado en la Laguna de Ibans, en el departamento de Gracias a Dios, evidenció el uso de fuerza y poder desproporcionados que se sigue utilizando en las zonas postergadas del país. El confuso hecho destaca la persecución de una embarcación que supuestamente transportaba droga y que generó el enfrentamiento entre miembros de las Fuerzas Armadas y pobladores de la comunidad. Esto obligó a que la fiscalía regional del Litoral Atlántico (FRLA), a través de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, investigara el incidente.
- c) Las comunidades de diversas regiones del país continuaron protestando y oponiéndose a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), proyectos que, bajo el argumento de generar empleos, han sido utilizados para concesionar territorios que, de acuerdo con la Ley, se declararán autónomos. Por eso, paralelo a las protestas, las declaratorias de territorios libres de ZEDE (en cabildos abiertos municipales) están en aumento, como medida para frenar estos proyectos.

En relación con la pandemia y otros factores

- a) En relación con la pandemia, la incapacidad del gobierno para adquirir vacunas mediante compras, y masificar la vacunación con las obtenidas mediante donaciones, continúa marcando el manejo de esta emergencia sanitaria. De hecho, la mayor parte de las vacunas aplicadas a la población hondureña, a la fecha, han sido donadas por países amigos y el mecanismo COVAX, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como las compras realizadas por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Y mientras ese es-

cenario persiste, el virus sigue dejando luto y dolor: la cifra de contagios, al cierre de septiembre, fue de 363 mil y la de personas fallecidas de un poco más de 9 mil casos, según los datos oficiales de la Secretaría de Salud. En ese escenario, Honduras enfrenta una nueva amenaza con la variante Delta Plus, ya que se proyecta que en los próximos meses los cuadros clínicos serán más agudos y la fatalidad será mayor en todas las edades, de acuerdo con la dirección de Epidemiología del SINAGER. Esta situación prevé un escenario sanitario complejo, en los subsiguientes meses, ya que a la fecha no existe una estrategia concatenada entre las actividades político-propagandísticas, el Covid19 y el proceso de vacunación, es decir, entre la institucionalidad electoral y la Secretaría de Salud.

- b) Finalmente, y no menos importante, se destaca el flujo migratorio que sigue en ascenso en las zonas fronterizas, especialmente en Trojes, El Paraíso, y también en la zona Sur del país, con la llegada masiva de haitianos, cubanos, africanos y ecuatorianos. Esta situación ha generado que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), desde hace un mes, haya desplegado autobuses a la zona de oriente, para trasladar a los indocumentados. Y mientras en el sur y oriente de Honduras acontece esta situación, por las fronteras colindantes con Guatemala, los hondureños continúan saliendo de manera disgregada por los puestos de control en las fronteras, con la intención de llegar hasta los Estados Unidos. En sentido contrario, se registró un incremento de las personas retornadas de México y de los EEUU, en un círculo perverso que continuará alimentando la multi crisis de la sociedad hondureña, sin opciones viables al corto plazo para encontrar una salida sostenible a esta situación.

4) Recomendaciones

1. La institucionalidad electoral debe trabajar en tres direcciones para enfrentar el clima de violencia electoral:
 - a. El Consejo Nacional Electoral (CNE), debe hacer uso de la normativa (artículo 115 de LEH) que le permite establecer sanciones administrativas a los provocadores de la violencia y expresiones verbales de odio y ofensa.

- b. El Tribunal de Justicia Electoral (TJE), con el respaldo de la sociedad civil, demandar la aprobación, por parte del Congreso Nacional, de la Ley procesal electoral como herramienta clave para enfrentar las infracciones y delitos electorales.
 - c. El Consejo Nacional Electoral (CNE), con el apoyo de organizaciones ciudadanas, desplegar una amplia campaña de educación cívica democrática que desestime la violencia electoral.
2. Es imperativo que la Unidad Especializada Contra Delitos Electorales (UECDE), dependiente de la Dirección General de Fiscalías (DGF), comience a operar con equipo humano, logístico y un presupuesto acorde a la demanda de los casos de violencia política, para comenzar procesos de investigación que desemboquen en sanciones judiciales que sirvan de precedente y contribuyan a disminuir la violencia política durante el proceso electoral y desmontar la impunidad estructural.
3. La sociedad civil organizada y no organizada debe ejercer un papel más beligerante y demandador de un alto a la violencia política porque, hasta el momento, los hechos en este ámbito han pasado inadvertidos y sin generar la preocupación que el caso amerita, de cara a evitar que la violencia se acreciente en los meses de los próximos meses que quedan para que se lleven a cabo las elecciones generales 2021.
4. El asunto de la pandemia es un tema que tendrá que requerir una atención especial de parte de la institucionalidad electoral y del sector salud. En tal sentido, es deseable ir trabajando, desde ahora, un protocolo de bioseguridad para el día de las votaciones. Igualmente, SINAGER debería asegurar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad ya establecidas, en las concentraciones de los partidos políticos.
5. La coyuntura electoral es un buen momento para posicionar nacional e internacionalmente la amplia infracción de los derechos humanos, en especial de los movimientos sociales territoriales, de los defensores y defensoras. En tal sentido, es deseable desde el movimiento social una mayor articulación social y denuncia de la situación que viven especialmente las comunidades agrarias, indígenas y afro descendientes afectadas por múltiples proyectos extractivistas y por la nueva amenaza de las ZEDE.